

órgano del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO de Argentina
Sección del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

Solo la clase obrera puede responder a la catástrofe económica y sanitaria

- **Desconocer la deuda externa**
- **Expropiar toda la salud privada,
¡Por un único sistema de salud gratuito!**
- **Acabar con la desocupación repartiendo las horas
de trabajo sin afectar el salario**
- **Ajuste de salarios y jubilaciones
con un mínimo igual a la canasta
familiar**
- **Estatizar todos los sectores
vitales de la economía**
- **Estatizar la banca y el comercio
exterior**

**Este plan de emergencia
sólo puede ser impuesto
por una rebelión popular**

¡Libertad a Sebastián Romero!

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS



Solo la clase obrera puede poner en pie un plan de emergencia para responder a la catástrofe económica y sanitaria

Como advertíamos en los últimos años, estábamos frente a una **crisis de características extraordinarias a nivel mundial**. La crisis del 2008 se extendía a todo el mundo y no lograba cerrarse. La agresiva guerra comercial que involucró a EE.UU., China y Europa, agravó más la situación, exacerbando el proteccionismo, avanzando en la conquista de recursos en los países semicoloniales, descargando sobre ellos la crisis de sobreproducción. Con niveles de endeudamiento de los países, las empresas y las personas que había hecho sonar todas las campanas de alarma. Ajuste tras ajuste fueron demoliendo los presupuestos para salud y educación, se aplicaron reformas laborales, tributarias, jubilatorias que hicieron retroceder las condiciones de vida y de trabajo de las masas en todos los países. El capitalismo se sobrevivía destruyendo condiciones conquistadas por la sociedad en las últimas décadas, creciendo la desocupación a niveles insostenibles con más de 200 millones en el mundo. Decenas de millones de hambrientos y desesperados migraban desde las semicolonias hacia los países desarrollados buscando trabajo, escapando de las guerras. El comercio mundial y la producción se desaceleraban, mostrando indicadores de estancamiento. Este era el escenario que teníamos a principios de año, por mostrar algunos de los aspectos destacados.

No lo olvidemos. La pandemia vino a explotar simultáneamente todas estas cuestiones, en todo el mundo. En 4 meses la situación que era dramática se transformó en catástrofe. Cientos de miles de empresas en todo el mundo cierran o suspenden sus actividades, y estiman las instituciones mundiales que la cantidad de nuevos desocupados puede superar los 400 millones, con actividades que llevará mucho tiempo recuperar después de superada esta pandemia. En esta situación gobiernos y empresas siguen descargando la crisis sobre los más pobres, sobre los más miserables y desesperados, las ayudas de los gobiernos llegan en cuentagotas. Un sistema que acumula riqueza y ganancias extraordinarias durante siglos y no puede sostener la vida de sus esclavos durante tres meses, no debe seguir existiendo.

También se sucedían las movilizaciones, las huelgas, la resistencia en muchos países contra los planes de ajuste, en algunos casos rebeliones formidables de las masas como en Chile. Este proceso de lucha fue apenas interrumpido por la aparición del virus y las campañas de los gobiernos de aislamiento, distanciamiento, y de terror informativo y la actitud de las direcciones sindicales de dejar en manos

de la burguesía la respuesta a la crisis sanitaria. Las masas retoman el camino de lucha y resistencia porque la situación social no se soporta.

La burguesía no tiene ninguna salida para ofrecer, ni en las grandes potencias ni en nuestros países, que no sea destruir masivamente fuerzas productivas agravando drásticamente nuestras condiciones de vida y de trabajo. La pandemia deja al desnudo todas las miserias, toda la podredumbre, la corrupción, del capitalismo en desintegración.

EE.UU. la mayor potencia, la que ha acumulado más riqueza y poderío en la historia, está en el centro de la crisis. El caos económico, político y social aparece por doquier. La orden de intervención militar de su presidente fue duramente cuestionada y abandonada. Sus políticas represivas, racistas, discriminatorias, están siendo rechazadas activamente.

Tiene record de contagiados y de muertos por la pandemia. Una parte muy importante de la población no tiene cobertura médica, para otros es extremadamente caro acceder al sistema de salud, otros no quieren recurrir al sistema de salud para no ser denunciados. Son los latinos y los negros los que más se mueren, son los más pobres los que más se mueren, tal como ocurre en las semicolonias. El gigante capitalista tiene los pies de barro y se mueve como un borracho en el ring, disparando trompadas al aire, está herido y enceguecido, aunque no por eso deja de ser peligroso, para los estadounidenses y para toda la humanidad. Todo el mundo pudo ver que no puede garantizar ni la salud para sus habitantes, que destruye en 3 meses 40 millones de puestos de trabajo. Que apenas si fabrica un 10% de los insumos médicos que necesita, depende de la importación de equipos y hasta máscaras desde otras latitudes. Pagan con su propia moneda el desastre de sus políticas. EE.UU. en estas condiciones queda muy debilitado y golpeado en su papel de timón del capital financiero internacional.

En este cuadro el gobierno argentino es apurado por Wall Street, por el FMI, y los grandes capitalistas locales a que reconozca toda la deuda externa y que pague lo que no valen los bonos emitidos para tomar deuda para fugarla, para saquear la economía. Mentira que hay una “quita” en la negociación, el país tendrá más deuda el mes que viene que la que teníamos hace tres meses. Que no nos engañen. El gobierno está de rodillas frente al capital financiero aceptando pagar lo que todos sabemos que fue

un robo. Este acuerdo es una traición, avalado por las dirigencias sindicales, los movimientos sociales y la mayoría de los partidos políticos. ¿Para qué sirven los estudios que se hicieron que demuestran quién se la llevó, quiénes especularon, quiénes se beneficiaron? Si termina agachando la cabeza y haciéndonos pagar a todos durante 20 años la plata que se llevaron unos pocos que tienen nombre y apellido.

El gobierno es consciente de la gravedad de la situación, que las empresas despidieron masivamente pese a las prohibiciones, que siguen cerrando decenas de miles de empresas, que hay millones de trabajadores que no tienen condiciones para subsistir y menos en los marcos de la pandemia. Lo que ofrece son migajas, una burla, ante las necesidades urgentes y perentorias.

Es necesario un plan de emergencia obrero y de los oprimidos para enfrentar la crisis,

* que empiece por desconocer toda la deuda externa, que estatice la banca y el comercio exterior,

* que estructure un sistema único de salud, gratuito, universal, nacional, para todos. Terminar con los privilegios de salud para los que tienen dinero para pagarla. Sobre la base de expropiar las clínicas, prepagas, las clínicas, laboratorios, ¡basta de negocios con la salud!,

* solución urgente del drama de la desocupación repar-

tiendo todo el trabajo disponible entre todos los trabajadores y la implementación de un plan nacional de obras públicas serio, no la fantochada infame que están presentando. ¡Basta de trabajo precarizado!

* Ajuste inmediato de salarios y jubilaciones que tengan como piso lo que cuesta la canasta familiar, no lo que recomiendan las cuentas del FMI.

* Estatizar todos los sectores vitales de la economía, empezando por los hidrocarburos y la gran propiedad agraria. El desarrollo de las fuerzas productivas está bloqueado porque los medios de producción están en manos de un puñado de empresas que concentran todos los recursos. Es necesario centralizar todos esos recursos para planificar la economía en beneficio de la enorme mayoría de la población, empobrecida y saqueada durante décadas.

Para imponer este plan de emergencia la clase obrera debe ponerse de pie, política y organizativamente. Sabiendo que ningún gobierno patronal, de cualquier tipo, es capaz de tocar los grandes intereses que dominan el país. La clase obrera debe independizarse políticamente, luchando por su propia estrategia de poder, un gobierno de la mayoría oprimida, un gobierno obrero-campesino (la dictadura del proletariado). Este plan de emergencia sólo puede ser impuesto por una rebelión popular, por la acción de las masas, nunca por una ley del Congreso, que sirve a los intereses del capital financiero.

¡Por la libertad de Sebastián Romero!

(Declaración de las organizaciones del Espacio de Trabajadores de Zona Norte)

El martes 30/6 el juez interino del Tribunal Nro. 12, Canicoba Corral, denegó el pedido de excarcelación de Sebastián Romero presentado por sus abogados. El 13 de julio se realizará la audiencia de apelación establecida por el juez Martín Irurzun en la Cámara criminal y correccional - sala 2, a pedido de su defensa.

Sebastián Romero es un ex delegado obrero de la General Motors perseguido por el gobierno de Macri por haber participado, junto a centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, en la movilización contra la reforma previsional. Sin que hasta el día de hoy se haya presentado una sola prueba de haber cometido algún delito el Juez Torres ordenó, en su momento, su detención, así como la de César Arakaki y Dimas Ponce, quienes fueron apresados y luego liberados. Torres denegó el pedido de eximición de prisión presentado inmediatamente por los abogados de Sebastián y, ante la manifiesta arbitrariedad de su detención y falta de garantías legales Sebastián no se presentó, y por eso fue perseguido hasta internacionalmente poniendo un precio de un millón de pesos a su cabeza. Una cifra superior a la de genocidas y violadores prófugos. Por otra parte, Daniel Ruiz, ex delegado petrolero y dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), al igual que Sebastián, fue apresado y mantenido en prisión injustamente por la misma causa durante 13 meses, como método extorsivo para obligar a Sebastián a entregarse. Daniel Ruiz, liberado tras una intensa y amplia campaña de movilización nacional e internacional, sigue procesado

y afrontando un juicio al igual que César Arakaki.

El día 30 de mayo Sebastián Romero fue apresado en Uruguay por Interpol y mantenido preso en el penal de Libertad (donde estuvieron detenidos los presos políticos de la dictadura uruguaya) hasta que se efectivizó su extradición a Argentina, el 25 de junio.

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Espacio de Trabajadores de Zona Norte, exigimos la inmediata libertad de Sebastián Romero. Sebastián es claramente un perseguido político del gobierno de Macri y su ministra de seguridad Patricia Bullrich. Actualmente está detenido en base a acusaciones de una causa armada con esos fines y es por tanto un preso político. Pedimos al gobierno de Alberto Fernández y al Ministerio de Justicia la recusación de los jueces intervinientes, su juicio político y la declaración de nulidad de toda la causa por los hechos del 18 de diciembre. No puede haber ningún preso político por luchar en la

Argentina. Luchar no es un crimen. Basta de criminalización de la protesta y la lucha social. Llamamos a la más amplia movilización para acabar con las persecuciones políticas y gremiales y por el desprocesamiento de todos/as los/las luchadores/as. Absolución de Daniel Ruiz, César Arakaki y todos los luchadores procesados en la misma causa. Libertad a Milagro Sala, Luis D'elía y todos/todas los/las presos/as por luchar. ¡Libertad ya a Sebastián Romero!

Gran movilización por la estatización de Vicentin en el “Día de la Independencia”

Los obreros del sindicato de aceiteros de Reconquista y de Rosario, respaldados por decenas de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales, marcharon en Reconquista y Rosario en defensa de sus puestos de trabajo y en favor de la expropiación e intervención de la empresa. Rechazan además la extranjerización de Vicentin.

La lucha por la expropiación de Vicentin tiene gran importancia para la provincia y para todo el país. Para impedir que se la apropien las multinacionales o la desguacen. En todo el grupo trabajan más de 7.000 trabajadores.

Estamos en una situación extraordinaria de destrucción de cientos de miles y millones de puestos de trabajo aquí y en todo el mundo, cierran decenas de miles de fábricas, talleres y comercios. Está en nuestras manos detener la barbarie capitalista, con nuestros propios métodos de lucha, con nuestra organización y política independiente. Confiamos sólo en nuestras propias fuerzas. El Congreso y la Justicia están al servicio de los intereses del gran capital.

Debemos decir con claridad que las leyes que regulan concursos y quiebras están hechas a medida de las necesidades de los capitalistas, de hecho, modificadas por el kirchnerismo para impedir que las expropiaciones se conviertan en estatizaciones. Los trabajadores no debemos enredarnos en sus vericuetos. No generar ninguna ilusión en la Ley y la Justicia. Debemos expresar una posición independiente frente a todos esos procesos. Todos los activos de las empresas deben ser expropiados sin pago y la empresa estatizada bajo control obrero colectivo. Que la deuda con los bancos privados del exterior y locales se la arreglen los directivos y accionistas de la empresa.

El comité de control no es el camino a la estatización, sino a la legitimación de la estafa

Los trabajadores aceiteros de Vicentin Avellaneda informan que eligieron a Leandro Monzón, integrante de la comisión interna de la planta, como su representante en el **Comité de Control** que actúa en el concurso de la empresa, donde desempeñará tareas junto a un representante de los trabajadores de San Lorenzo, uno por el Banco Nación, uno de ACA (cooperativas agrarias) y dos por los bancos internacionales. Destacamos el hecho de que los trabajadores son quienes han elegido a su representante en el Comité.

Reivindicamos la democracia obrera que ejerce el Sindicato de Aceiteros, en este caso con la elección de los representantes al Comité de Control. Sin embargo no debemos olvidar que el comité de control es terreno enemigo y la intervención de los obreros en este terreno debe ser de denuncia. Será fundamental que toda la información y las decisiones de este comité sean discutidas en las asambleas de base, hacer comisiones obreras propias para el

seguimiento y la denuncia de todas las maniobras de los empresarios. Subordinar la intervención en este comité a la necesidad de fortalecer la lucha por la estatización sin pago de Vicentin bajo control obrero colectivo.

Este “Comité de Control” es establecido por la ley de concursos y quiebras, una institución patronal para defender los intereses de todos los acreedores, para que recuperen todo lo que Vicentin les debe, o lo más que se pueda. Esto puede significar la venta de la empresa en su totalidad o su desguace. Los trabajadores no tienen poder de veto en ese Comité. Este proceso es comandado por la Justicia burguesa, que reconocerá los créditos que reclaman los bancos del exterior, los bancos locales y los productores que entregaron sus cosechas.

Los trabajadores deben alertar sobre las consecuencias que puede tener la aplicación de esta Ley. Las posibilidades de acceder a los documentos e información sobre lo que sucedió será muy limitada. Las empresas, sus organismos de administración, sus auditores, son especialistas en ocultar la realidad de sus negocios. No nos olvidemos que estamos frente a un fraude de gran magnitud.

La independencia política del proletariado es la única garantía de soberanía nacional

Los compañeros aceiteros dicen que «Ante lo que se verifica cada día más como una monumental estafa y defraudación a la banca pública, es fundamental para la defensa de los puestos de trabajo la participación obrera que la ley impone». Pero es necesario insistir que los puestos de trabajo sólo se defienden con los métodos de la clase obrera, no es en ese ámbito que se pueden defender los puestos de trabajo. La Ley y la Justicia ni aseguran los puestos de trabajo ni la defensa del patrimonio nacional. Este camino no es el de la expropiación, es el camino que imponen los grandes capitalistas para evitar que el Estado tome el control de la empresa.

Vicentin, como todas las exportadoras, como los grandes terratenientes, defienden un interés contrario a la Nación y los trabajadores. La lucha por **conquistar la soberanía nacional** pasa por expulsar a las multinacionales, estatizar el comercio exterior y la banca, desconocer la deuda externa, estatizar todas las empresas vitales para el país y terminar con los grandes terratenientes.

La tarea de **independizar nuestro país** y dejar de ser una colonia del imperialismo es de interés de todos los oprimidos, pero semejante tarea exige la dirección política por parte de la clase obrera, la única clase que puede llevar esta lucha consecuentemente hasta el final. Los pequeños productores agropecuarios estafados por Vicentin y otros pulpos sólo pueden terminar con ellos si se encolman detrás de la política de la clase obrera.

Charla debate sobre Vicentin: nuestra posición

El Espacio de Trabajadores de Zona Norte impulsó una charla debate en torno a la situación de Vicentin con la presencia de Daniel Yofra, secretario general del Sindicato de Aceiteros. Saludamos esta iniciativa y resaltamos la importancia de entablar un debate con este importante sector de la vanguardia obrera. El dirigente de aceiteros se posicionó por la defensa de la intervención de Vicentin por parte del Estado y afirmó que la decisión sobre la expropiación le corresponde a la justicia. Planteó el debate ideológico que implica la medida y la necesidad de defender la decisión del gobierno de intervenir la empresa. Sostuvo también que ellos ejercen el control obrero de sus condiciones de trabajo mediante los comités mixtos en las fábricas. El debate en torno a esta intervención se dio en términos fraternales y las distintas organizaciones presentaron sus posiciones oralmente. A continuación reproducimos la posición que presentamos en el evento.

¿Qué representa Vicentín?

Es la principal empresa de molienda de oleaginosas. Puede producir 29.500 toneladas por día. Es la mayor productora de biodiesel del país. En 2016 fue el primer exportador de aceites y el segundo de harinas. Tiene dos terminales portuarias. En 2017 produjo el 21% de la molienda de soja, en 2018 el 27%. Se ubica en el sexto puesto del ranking de exportadores agroindustriales.

Es un saqueo incluso en términos burgueses

Es empresa de grandes dimensiones que se encuentra en proceso de concurso de acreedores y cruzada por varios juicios por estafas. Las maniobras descaradas de venta de granos a precios irrisorios a empresas fantasma – en paraísos fiscales para que los empresarios garanticen sus ganancias afuera – pone en evidencia la necesidad de monopolizar el comercio exterior. Terminar con las triangulaciones que impiden conocer quién es el verdadero comprador y qué precio paga, garantizar el ingreso de divisas e impedir la fuga.

¿Qué tipo de expropiación planteaba el gobierno en un primer momento?

La expropiación con pago que plantea el gobierno es un rescate de la empresa, como lo dice el gobierno. No hay la más mínima intención de afectar patrimonialmente a los dueños, que fueron a pedir el salvataje del gobierno, porque no estaban en condiciones de sostenerla. El gobierno anticipó que será un modelo similar al de YPF, que como denunciábamos en su momento, no era ninguna expropiación (sino compra de las acciones a Repsol a precio elevado), y dejando el 49% de las acciones en manos privadas. Si no se establece el monopolio estatal, la intervención del Estado es para favorecer los negocios de las multinacionales, como en el caso de YPF.

El rol de la justicia y el planteo actual del gobierno

El papel de la Justicia es preservar y proteger la gran propiedad, contra el interés de los trabajadores e incluso de los pequeños propietarios rurales a los que Vicentin debe mu-

chísimo dinero. La maniobra de la Justicia es impedir que el Estado tome control de la empresa. El gobierno retrocedió inmediatamente pasando de una posible expropiación a una intervención.

La incapacidad de la burguesía nacional de ser consecuente con sus planteos

El retroceso del gobierno no es un hecho aislado, es reflejo de la cobardía de la clase a la que representa. Así también: El proyecto inicial de centralizar todos los recursos de salud en el Estado para planificar las acciones contra la pandemia fue retirado. El proyecto de impuesto a las grandes fortunas aún no se presentó al Congreso –aunque ya redujeron la cantidad de empresarios que alcanza y el porcentaje-. La negociación de la deuda externa que empezó con un recorte de los intereses a pagar ya se fue modificando de 38 a 50%, el roce con Techint por los despidos terminó con los trabajadores despedidos.

El sector agroexportador no puede estar en manos privadas

Este es un planteo básico de soberanía nacional, es una necesidad para el desarrollo del país incluso en términos burgueses. Este sector es de importancia fundamental para la economía del país. Solo 10 empresas controlan el 91% del comercio de granos, la mayoría multinacionales. El sector es de los que más dólares debieran ingresar. No solo debe ser expropiada Vicentin sino las empresas que concentran el comercio exterior de granos. Al igual que la salud y la educación, el comercio exterior y los puertos fueron privatizados. Ningún gobierno se atrevió a dar marcha atrás con ello.

Sólo la clase obrera puede dar una respuesta integral

El fondo del debate es la soberanía del país, en qué manos quedan los resortes de nuestra economía. La burguesía nacional da muestras de sobra de su cobardía, de su corrupción y su sometimiento al imperialismo. Es la clase obrera la única que puede ser consecuente, la estatización de todas las empresas que controlan el comercio exterior de granos tiene que ser bajo control obrero y como parte de un programa integral de desarrollo del país que incluya la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la estatización de todas las fuentes de producción de energía como lo formuló la clase obrera en numerosos documentos de la CGT de los Argentinos o en los programas de La Falda y Huerta Grande. Es solamente si la clase obrera toma las riendas de la economía que podremos hablar de soberanía de lo contrario seguirá siendo el imperialismo, a través de las multinacionales, el que decida el destino del país

¿A qué nos referimos con estatización bajo control obrero colectivo?

Cuando hablamos de control obrero no nos referimos ni a la cooperativa que en realidad representa un retroceso histórico para los trabajadores, ni simplemente al control de las condiciones de trabajo. Nos referimos a nuestro derecho

como explotados a conocer el famoso “secreto comercial”, a publicar y denunciar con precisión todas las maniobras que utiliza la burguesía para saquear el país, a saber, realmente cuánta riqueza producimos y decidir su destino, a tener un conocimiento certero de las fuerzas productivas que tiene el país. El control obrero de las empresas estatizadas lo planteamos como una escuela para la clase obrera para planificación de toda la economía.

La experiencia demuestra que los caminos legales, legislativos, judiciales son una trampa para reforzar la opresión colonial sobre nuestro país. Medidas tan elementales de lucha por la soberanía nacional sólo pueden ser lideradas por la clase obrera, acaudillando a los oprimidos, con sus propios métodos de lucha, ocupando los establecimientos, ocupando las calles y los puertos, imponiendo su control.

27-06-2020

La respuesta a la desocupación creciente: Reparto de todo el trabajo entre todos los trabajadores

Se destruyeron 285.00 puestos de trabajo en dos meses. Los empleos más afectados fueron los de la construcción 59.000 personas; hotelería y gastronomía 44.000; comercio 37.000; actividades administrativas 28.000; industria 22.200; servicio de transporte y almacenamiento 21.500 puestos registrados. Otro tanto se destruyó en los trabajos en negro. Agravando la crisis de desocupación y precarización que existía antes de la pandemia. De nada vale la ley que prohíbe los despidos. Los capitalistas aplican su propia ley y no hay discurso moral que los detenga. Las direcciones sindicales bien, gracias.

Casi 20.000 empresas de todo tipo y tamaño han cerrado que se suman a las decenas de miles cerradas en los años anteriores.

Es urgente un **plan de obras públicas** para generar cientos de miles de puestos de trabajo. Poner en marcha la construcción de no menos de 400.000 viviendas por año, resolver los sistemas de gas, agua corriente y cloacas para toda la población. La construcción de todas las escuelas y hospitales que se necesitan. Poner en marcha los talleres para la fabricación de todo el material ferroviario, desde locomotoras y vagones hasta los rieles, para reconstruir la red. Ya sabemos que no habrá inversión privada, el Estado debe encarar estas inversiones. El Plan que ofrece el gobierno es una burla, comparado con la magnitud del drama que se vive.

Toda la **burocracia es cómplice** del ataque de las patronales contra los trabajadores sea despidiendo, recortando salarios, difiriendo su pago, desconociendo convenios, etc. Los trabajadores en cada lugar resisten como pueden para no perder sus puestos de trabajo. Ellos están preocupados por sostener al gobierno y reclamarle todas las semanas fondos para sus obras sociales.

No es un fenómeno local. Es la situación en todo el mundo. Las patronales descargan la crisis sobre los trabajadores. Se estima que en este año podrán destruirse más de 400 millones de puestos de trabajo en el mundo.

Aquí y en otros países se promete un **ingreso universal** para cuando pase la pandemia, sabiendo las consecuencias de la catástrofe que se vive y tratando de calmar la bronca y la desesperación de amplios sectores de la población. Dicen que ese ingreso universal tendrá una contraprestación, algún tipo de trabajo. Eso será más trabajo precarizado o una forma de subsidio, muy lejos de cubrir las necesidades vitales.

Es necesaria la **creación de cientos de miles de puestos**

de trabajo genuino basado en un plan de obras públicas en manos del Estado. Pero la respuesta de fondo es el **reparto de todas las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores**. Ni un solo trabajador sin su puesto de trabajo. Esta política requiere terminar con las “horas extras”, trabajar en dos o tres lugares, etc. a que somos empujados los trabajadores para alcanzar ingresos que nos permitan vivir como personas. El salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades vitales, de manera tal que no tengamos que someternos a una sobreexplotación.

Esta es la política para **terminar con el flagelo de la desocupación o subocupación**. Desde hace más de 40 años retrocedemos en la cantidad y calidad de los puestos de trabajo, a medida que se acelera el saqueo, la entrega, el cierre y desmantelamiento de industrias. Esta es la respuesta a una situación que es estructural, no tiene que ver con la pandemia o el gobierno de Macri. Es el capitalismo en descomposición que nos empuja a la barbarie.

Para imponer esta política es necesaria la **acción de masas de todos los trabajadores**, ocupados y desocupados, registrados o no, afiliados a los sindicatos o no, activos y jubilados. **TODOS**. Una lucha de conjunto hasta imponer esta salida, aplicando los métodos de acción directa hasta lograrlo. ¿Con estos dirigentes sindicales? Difícil. Como alguien dijo hace tiempo “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. Debemos crear las condiciones desde las bases para **expulsar a todas las direcciones burocráticas**, para recuperar los sindicatos y todas las organizaciones sindicales para los trabajadores. Debemos terminar con su política de conciliación con todos los gobiernos, con todas las patronales. Las consecuencias están a la vista, los trabajadores hemos retrocedido en nuestras condiciones laborales y de vida. ¡Es hora de decir basta! Los sindicatos son de los trabajadores. Debemos imponer la independencia política y sindical frente a gobiernos y empresarios. Insistimos, sólo con la lucha de todos, unificados, con nuestros propios métodos de lucha, podremos imponer esta salida, nunca será por una ley del Congreso.

Nos dirán que los capitalistas y sus gobiernos no quieren o no se puede. ¡Entonces al diablo con ellos! Tomemos el problema en nuestras manos directamente. Si no lo hacemos nos enterrarán con toda su inmundicia y será cada vez más difícil que nos pongamos de pie. Preparemos desde abajo esta lucha que tenemos que dar, por nuestra sobrevivencia, por la sobrevivencia de la humanidad, por nuestro futuro.

Máximo Kirchner a los grandes empresarios: "El pueblo va a pagar la deuda pero la plusvalía será para ustedes"

Hubo una reunión en los últimos días entre representantes empresariales de los más poderosos con dirigentes del oficialismo, Massa, Máximo Kirchner y Wado de Pedro.

Según informa Horacio Verbitsky uno de los empresarios hizo referencia a los reclamos por el respeto a la propiedad privada que encabezan sectores del macrismo. Lo más significativo es la respuesta que habría dado Máximo Kirchner, para no dejar dudas:

"Estamos cerca de cerrar la negociación con los acreedores externos para salir del default que dejó Macri de la deuda que él mismo contrajo, con la aprobación de muchos de ustedes. Eso lo va a pagar el pueblo argentino pero la plusvalía será para ustedes, porque en cuanto firmemos, el valor de mercado de sus empresas va a aumentar muchísimo. ¿Les parece que con nosotros la propiedad privada corre peligro?"

El gobierno es plenamente consciente de que la deuda externa tomada por el gobierno de Macri, que llevó al default, se destinó a la fuga de capitales, que el pueblo argentino será quien la pague, y que las empresas se revalorizarán por el acuerdo con los acreedores. Por eso contesta con tanta seguridad que con este gobierno la propiedad privada no corre ningún peligro.

En el mismo sentido, ante la cuestión Vicentin, se encargaron de aclarar que estaban salvando, rescatando una empresa en ruinas por su vaciamiento, sus deudas y sus estafas. Que "si hubieran tenido intenciones de afectar la propiedad privada hubieran ido por Cargill" (Máximo Kirchner citado por Verbitsky).

No hay dudas que este gobierno, como los anteriores kirchneristas no han tenido intención alguna de cuestionar la gran propiedad, ni siquiera de sectores vitales en manos de las multinacionales. No ha dado marcha atrás con las privatizaciones de la dictadura y de Menem, corazón de las políticas neoliberales de saqueo del patrimonio nacional. Un punto central del llamado "Consenso de Washington" exigía la privatización de las empresas estatales y que el Estado se abstuviera de inmiscuirse en la economía. Esta instrucción fue ordenada por el FMI y el Banco Mundial para los países atrasados.

¿Por qué razón la derecha, los grandes empresarios, acusan al gobierno de querer violar su derecho de propiedad? Para presionarlo para que no tome ninguna medida que pueda afectar mínimamente sus intereses. Para que se discipline completamente a sus exigencias. Los grandes capitales rechazan pagar impuestos, rechazan los controles, las regulaciones y exigen plena libertad para sus negocios.

El peronismo o el kirchnerismo expresan la actitud de una clase, la burguesía, que es antinacional, parasitaria, entreguista, corrupta, saqueadora, incapaz de transformar la economía y defender la soberanía nacional. Y esto es irreversible.

Justamente el principal problema es la gran propiedad privada, que bloquea las fuerzas productivas de la sociedad. Si no se termina con ella no habrá forma de salir de la situación desastrosa en que vivimos. La economía no deja de retroceder en las últimas décadas, empujando a la desocupación, a la miseria, a la precarización y pobreza a la mayoría de la población.

Ediciones Proletarias Juan Yañez ¿Pedí tu ejemplar!

 <p>Guillermo LORA LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA</p>	 <p>Los cuatro primeros Congresos de la III Internacional</p>	 <p>LA IZQUIERDA EN SU LABERINTO BALANCE DE LA EXPERIENCIA DEL FIT</p>	 <p>El programa de la Corriente Federal de Trabajadores no es obrero</p>
--	--	---	---

\$500

\$500

\$100

\$30

Obras Sociales y burocracias sindicales 50 años de privatización de la salud

El pasado marzo se cumplieron 50 años del decreto-ley 18610 de la dictadura de Onganía que se convertiría en la pieza fundamental del proceso de privatización de la salud. Esta ley establecía la obligatoriedad de las Obras Sociales para todos los trabajadores registrados, conformando una caja, administrada por los sindicatos, con el 6% de aporte patronal y 3% del trabajador.

Se trató de una decisión firme de la burguesía que, a menos de un año del Cordobazo, precisaba con urgencia reforzar el control sobre el movimiento obrero insurgente. Con este decreto-ley de Obras Sociales se colocó en manos de la burocracia sindical una suma gigantesca de dinero que hasta el día de hoy sigue funcionando como el lubricante que garantiza los pactos sociales entre gobiernos y burócratas. Cuentan que en aquél entonces, mientras negociaban los pormenores del decreto-ley, alguno de estos traidores del movimiento obrero dijo que “con esto nos hacemos ricos, pero se acabó la resistencia peronista”.

Si bien las Obras Sociales existían antes de 1970, éstas abarcaban a un reducido número de trabajadores, del mismo modo que había hospitales privados, pero significaban una porción menor al 20% del sistema de salud, que en su mayoría era completamente estatal y financiado por rentas generales del Estado. Para 1978 el nuevo sistema de Obras Sociales abarcaba al 80% de los trabajadores, y las burocracias sindicales se habían convertido en el principal agente de privatización de la salud.

Este proceso se combinó con una política de destrucción de la salud pública que consistió, por un lado, en la descentralización de los hospitales (pasando de la órbita nacional a la provincial) y, por el otro, en la reducción de sistema estatal (pasando de 116.000 camas en 1955 a 84.000 en 2019).

Un nuevo conjunto de reformas se agregó en la década de los 90'. En 1991 establecieron que los hospitales públicos podrían cobrar por sus prestaciones. En 1993 se aprobó la libre elección de Obra Social, favoreciendo un proceso de concentración de los negociados en un puñado de aquéllas. En 1995 se redujo del 6 al 5% el aporte patronal.

Ningún gobierno ha osado dar marcha atrás con este proceso. La total caducidad del nacionalismo burgués se verifica en su incapacidad para establecer un programa distinto al que el imperialismo y las dictaduras establecieron para nuestro país. Ni siquiera en medio de una ca-



tástrofe sanitaria. Apenas unas horas duró en la boca de Alberto Fernández el intento de avanzar en algún tipo de centralización del sistema de salud. Bajo la presión de los empresarios de la salud y, peor aún, de los burócratas sindicales que no quieren perder el negocio multimillonario, el gobierno nacional reculó sin vergüenza. Y no solo eso, ahora piensan salir a subsidiar a las clínicas privadas con los fondos de las Obras Sociales de estatales como en la provincia de Buenos Aires.

Ya hemos vivido una situación similar. En el 2001, con millones de desocupados que se quedaron sin Obra Social, los hospitales públicos fueron desbordados. Bajo nuevas formas se repite el fenómeno: las Obras Sociales y Prepagas buscan por todos los medios posibles evitar brindar cualquier tipo de atención. Sobran los casos de denuncias de personas que han esperado días a que los vayan a buscar y nunca aparecen. Finalmente, solo el hospital público da respuesta, aún para quienes tiene Obra Social, situación que tiende a agravarse día a día. Mientras tanto burócratas y empresarios siguen llenando sus bolsillos a costa de nuestra salud.

A diferencia de algunos sectores de izquierda sueñan con algún día poder administrar de forma “transparente” alguna de las grandes Obras Sociales, **el POR ha sostenido a lo largo de décadas, en soledad, que es necesario terminar con todos los negociados expropiando a todas las clínicas y sanatorios privados, a los laboratorios y empresas farmacéuticas, integrándolos en un sistema único estatal, nacional y gratuito de salud para toda la población.**

www.por-cerci.org

11 2351 4699



Partido Obrero Revolucionario - Masas - Argentina

Los grandes laboratorios estuvieron detrás de la dictadura de Onganía

En enero de 1964 el presidente Arturo Illia envió al Congreso un proyecto de ley de control de los medicamentos que sería aprobado unos meses más tarde con los números 16.462 y 16.463, conocidas también como “Ley Oñativia” (en referencia a su ministro de salud).

El objetivo de la ley era establecer un control de precios, congelándolos a los vigentes a fines de 1963, limitar la publicidad de los medicamentos y el envío de regalías al exterior por parte de los laboratorios farmacéuticos. Por otro lado Oñativia pretendía que los medicamentos fueran declarados *bienes de interés social* de modo que en caso de emergencia sanitaria “el derecho al lucro no primara sobre el derecho a la vida”. Esta definición, sin embargo, fue eliminada por el Congreso.

Una comisión se dedicó a investigar más de 300.000 medicamentos y encontró que muchos de ellos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en **un mil por ciento al costo de producción**.

En la reglamentación de la ley, en 1965, se estableció un plazo de 6 meses para que los laboratorios presentaran una declaración jurada respecto a los costos de producción y sus contratos de regalías.

El propio Illia así lo recordaba: “Los señores tuvieron otra entrevista conmigo, volvieron a decir que la ley era



arbitraria, que atentaba contra la libre empresa, yo les reiteré que me expusieran cuáles eran sus objeciones y me dijeron: en pocos días le contestamos. A los diez días me derrocaron...”.

La importancia de estos hechos radica en poder extraer conclusiones políticas. Todo gobierno burgués se encuentra con límites infranqueables hasta donde le es posible avanzar. Su incapacidad no es fruto de una cualidad personal o cobardía, sino más bien reflejo de la clase social a la que representa y de cuyas ataduras no puede desprenderse.

Kicillof sale en defensa de la salud y la educación privadas

De la misma manera que el gobierno de Kicillof rescata financieramente a las clínicas privadas con \$400 millones que provienen de los aportes de los afiliados de IOMA, a partir de este mes nos enteramos que anunció un aporte extraordinario a cuenta de \$340 millones para las escuelas privadas. Dicho monto saldrá ni más ni menos que desde las arcas de la Dirección General de Escuelas.

Estas decisiones del gobernador Kicillof delatan una coordinación de políticas aplicadas en los dos sistemas. Son dos fenómenos de la misma política de reforma del Estado, junto a la reforma laboral y previsional. El carácter “nacional y popular” del gobierno no lo puede desligar de sus compromisos como administrador general de los intereses de conjunto de la clase dominante. En este sentido el gobierno de Kicillof es la continuidad de Vidal. Sin importar sus diferencias y matices los armoniza el interés común de protección de la propiedad privada, de resolver las crisis en beneficio del capital y en detrimento del trabajo.

En este terreno la burguesía viene desentendiéndose de la educación y salud pública y transfiriendo el costo a los propios trabajadores mediante el avance del sistema privado en ambos casos: en salud desde la dictadura de Onganía con el traspaso de las obras sociales al control gerencial de las burocracias sindicales como dispositivo privatizador, sumado a los laboratorios y clínicas privadas; y en educación la privatización avanza de la mano de la Iglesia y la reforma educativa del Banco Mundial.

El avance de la privatización de la salud y la educación son expresión de la descomposición de la burguesía como clase dominante, de su incapacidad para resolver su propia crisis más que descargándola sobre los trabajadores, destruyendo fuerzas productivas. Esta clase social parasitaria, expropiadora del trabajo ajeno, ya no puede tener un rol progresivo en la historia. Ha abandonado sus planteos de una educación y salud universales, de forma que esta bandera democrática solo podrá ser materializada por el proletariado bajo su propia perspectiva socialista.

El Covid 19 expone la privatización del sistema de salud de Neuquén

Por un sistema único estatal

Han pasado ya más de 100 días desde que se inició la cuarentena, cuando el gobernador Gutiérrez promulgó el decreto 414/20, que reglamentó la Ley de Emergencia Sanitaria. Tal reglamentación fijó las pautas para la utilización de camas y recursos humanos en los sistemas de Salud, convocatoria a funcionarios públicos, creación de un plan de protección ciudadana, obtención de financiamiento y reorganización y funcionamiento del subsector privado de la salud.

Con 585 casos informados y circulación comunitaria del virus, no hay ningún avance: al año 2017 la provincia contaba con 1130 camas en el subsistema público de salud, 780 en el subsistema privado, y un total de 1910 en todo el sistema de salud; en marzo de 2020 contaba con 1700 camas (200 menos que en 2017) entre el subsistema público y el privado, de las cuales 102 camas correspondían a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del subsistema privado, y 35 a camas UTI del subsistema público, es decir 137 camas de terapia intensiva en total; en tanto que se contaba con 135 respiradores artificiales en total, 92 respiradores de la salud privada y 43 respiradores de la salud pública. Al mes de julio, y según declaraciones de la subsecretaria de salud, Andrea Echauri, se cuentan con 140 camas de terapia intensiva (UTI), es decir solo se sumaron 3 camas UTI desde marzo a julio, como también la misma cantidad de camas totales en los hospitales, lo mismo sucede con los respiradores. Lo único que hizo hasta acá el gobierno fue montar un hospital de campaña en el espacio DUAM (sitio de convenciones) en la ciudad de Neuquén, con 148 camas y 40 equipos de oxígeno para pacientes con COVID positivo no críticos.

Está claro que el argumento de la ministra de salud Andrea Peve de incorporar 40 camas de terapia intensiva (UTI), fue para justificar la autorización del endeudamiento que solicitó el gobernador Gutiérrez por 100 millones de dólares para la emergencia sanitaria de 180 días.

Por otro lado los números reflejan el peso que tiene el sistema privado de salud en la provincia, donde el 75% de las camas de terapia intensiva son privadas, el 68% de los respiradores mecánicos son privados y casi el 50% de las camas totales son privadas. Sistema privado que viene creciendo en detrimento del sistema público, con la complicidad e impulso de los distintos gobiernos del MPN, que desde la década del 90 viene desgastando el hospital provincial Neuquén Castro Rendón y los distintos hospitales públicos, drenando esos fondos al privado vía pago de servicios como tomografías, resonancias, interna-

ciones, cirugías, créditos a sociedades privadas de salud y demás. Si el sistema de salud pública de Neuquén hoy se sostiene es por los trabajadores de la salud que vienen resistiendo estoicamente no solo el paupérrimo estado de infraestructura de los hospitales sino el deterioro de su salario y condiciones laborales, cuando no les suministran ni siquiera los insumos básicos de trabajo como barbijos, camisolines y otros.

Justamente esta última semana, se suscitaron denuncias de trabajadores de la salud sobre la situación en la que están trabajando y la necesidad de que le den respuesta a los requerimientos solicitados. Entre estas denuncias se encuentran las de dos enfermeros de la clínica privada ADOS (donde se desataron una serie de contagios que suman más de 70 casos) que denunciaron la falta de desinfección de la clínica, la falta de insumos como barbijos y mascarillas, y el contagio de los trabajadores, por lo cual uno de ellos se encadenó en la entrada del edificio, derivando en una dura suspensión, sin recibir ningún tipo de apoyo sindical. En tanto que la Directora del Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén (SIEN), Dra. Ortiz Luna, fue removida de su cargo por el ejecutivo por denunciar la falta de insumos para trabajar (solicitó a través de las redes sociales a la población la donación de barbijos), y el abandono por parte del ministerio de Salud a la labor de su área, donde 17 trabajadores del SIEN resultaron positivo de COVID.

Por todo esto decimos que es hora de establecer un sistema estatal, único, universal y gratuito de salud para todos. Es necesario expropiar sin pago, confiscar los recursos que administra una minoría que se enriquece a costa de nosotros, sacarnos de encima este gobierno burgués del MPN que hace más de 50 años gobierna, garantizando condiciones dignas y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar además de proveer de todo el equipamiento, infraestructura e insumos necesarios del sistema salud.



Cada vez mas casos de contagios en el sector textil

Lamentablemente nos enteramos del fallecimiento de una compañera de la empresa RA. La patronal no hizo nada frente a los primeros casos confirmados hace varias semanas atrás. A pesar de los reclamos se negaron a garantizar testeos a los trabajadores. Desde el primer día hay denuncias de que no se estaban cumpliendo los protocolos. Por ejemplo que no garantizaron el transporte y obligan a los trabajadores a amontonarse en el transporte público.

Esta situación no es solamente en RA. También nos enteramos que hay más casos en otras fábricas. En la empresa Carlos Vilariño hay más de veinte contagios. Lo mismo en SPRING y en PUNTO UNO, incluso con compañeros internados. Las empresas no cumplen las medidas básicas que se necesitan.

Lo mínimo sería que, cuando aparece un caso de contagio, los empresarios hagan test a todos los trabajadores de la planta para garantizar que no vaya al trabajo ningún trabajador positivo. Sabemos muy bien que muchos podemos ser asintomáticos y la empresa nos pone en riesgo a nosotros y nuestras familias.

Nos redujeron el salario y ahora se meten con nuestro aguinaldo

De lo que sí se preocuparon los empresarios es, ni bien empezó la cuarentena, en recortar los salarios al 70% (a pesar de que el gobierno está pagando más del 50%). Para esto, contaron con la complicidad de las direcciones vendidas de los sindicatos. Y encima ahora deciden unilateralmente que nos van pagar en cuotas el aguinaldo.

La situación de todos en el sector empeora, tenemos que organizarnos desde abajo. Coordinar entre distintas fábricas para obligar al sindicato a convocar a una asamblea general del gremio. ¡La situación exige un paro general y un plan de lucha del sector!

La burocracia sindical defiende a los empresarios

SOIVA; Unión de Cortadores; SETIA; se apuraron en firmar la rebaja salarial. Después nunca más se aparecieron por las fábricas para comprobar si se cumplían o no las condiciones básicas de seguridad. Igual que los empresarios, no hicieron nada cuando aparecieron los primeros contagios. Hoy pagamos las consecuencias de no tener una organización sindical fuerte. Las direcciones sindicales vendidas son las responsables, hemos visto como persiguen a todo aquel trabajador que defiendan los intereses de su clase, de sus compañeros.

Organizarnos desde abajo para recuperar nuestro sindicato

Tenemos que convocar asambleas para defender nues-

tras condiciones de vida. Exigir testeos para todos. Necesitamos recuperar la democracia sindical en nuestras organizaciones e imponer un plan de lucha para defender las condiciones de vida y de trabajo

👉 PONGAMOS EN PIE COMITES POR EMPRESA PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLAN TODAS LAS MEDIDAS

👉 TESTEOS PARA TODOS ANTE EL PRIMER CONTAGIO

ELABORACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DISCUTIDOS POR LOS TRABAJADORES

👉 PAGO DEL 100% DE NUESTROS SALARIOS RESPETANDO TODAS LAS LICENCIAS

👉 REAPERTURA DE PARITARIAS, SALARIO MINIMO IGUAL AL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR

👉 AGUINALDO COMPLETO, SIN DESCUENTOS Y NO EN CUOTAS

👉 QUE LAS PATRONALES ABRAN SUS LIBROS Y MUESTREN SUS NUMERO



HASTA LA VICTORIA
DEL PROLETARIADO SIEMPRE
COMPAÑERO JUAN YÁÑEZ
PRESENTE!!!

APOR
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

¡Con un fallo favorable, los trabajadores de Expreso reafirman su lucha en los portones de la empresa! El MPN también tiene responsabilidad en el conflicto

El juez Daniel Ferreyra dio lugar a una medida cautelar, favorable a los trabajadores. En primer lugar saludamos la fortaleza de los compañeros junto a sus familias que están sosteniendo una medida de acción directa por el pago de sus salarios y en defensa de sus puestos de trabajo. Son cientos los trabajadores despedidos en la región, sin embargo no todos han logrado organizarse para salir a luchar, por eso genera tanto apoyo y simpatía la lucha. Es en este marco que surge el fallo, sin embargo entendemos que para que se concrete es necesario redoblar los esfuerzos de lucha.

Ya hemos señalado en masas anteriores (nota de MASAS n° 372), que la patronal de Expreso Argentino hizo su dinero evadiendo impuestos, usurpando un terreno, violando leyes laborales, etc. Fueron los trabajadores quienes con su lucha evidenciaron a estos empresarios locales, que sin la complicidad del Estado no podría funcionar, por la cantidad de irregularidades legales con las que operan. Pensamos que el fallo judicial es producto del enorme esfuerzo de lucha en el acampe, impulsando la unidad, participando de la Multisectorial, realizando acciones en las calles con docentes, ceramistas, desocupados.

La burocracia de camioneros, alineada con la central de la CGT, está actuando como un fuerte dique para contener el malestar popular que no para de crecer. En esta coyuntura es importante pensar acciones que fortalezcan lazos con el resto de los trabajadores camioneros, la exigencia a un paro del sindicato continua vigente.

Por otra parte el gobierno del MPN también es responsable de la situación en la cual se encuentran. El gobernador Omar Gutiérrez no puede desentenderse de este conflicto, se tienen que debatir medidas que apunten a los responsables políticos del conflicto. En cuanto a las acciones legales sostenemos que tienen que continuar haciéndose, sin perder de vista que son las acciones de lucha y la unidad con el resto de los sectores, las medidas efectivas para conquistar los reclamos. Los tiempos de la Justicia no son los tiempos de los trabajadores, es necesario exigir al Gobierno provincial que atienda inmediatamente el reclamo que tiene a los trabajadores desde marzo sin cobrar sus salarios.

¡Fuerza compañeros, han demostrado una enorme fortaleza para luchar por sus condiciones de vida!

El aguinaldo en tres cuotas, mientras la burocracia se queda en casa

Las burocracias sindicales típidamente cuestionan el pago desdoblado de los aguinaldos por las redes sociales. El gobernador Omar Gutiérrez confirmó que se acreditará el 40% del sueldo anual complementario en la segunda quincena de julio -a partir del 21- y las otras dos cuotas serán del 30% y se abonarán en agosto y septiembre, las burocracias solo manifiestan que es ilegal, que la provincia podría solicitar ayuda a Nación. En ningún momento plantean la URGENTE necesidad que tenemos los trabajadores de salir a defender nuestras conquistas, las patronales han aprovechado la pandemia para reducir salarios, cesantear compañeros, no incorporar personal, etc. En el caso de los trabajadores de estatales neuquinos hemos perdido la conquista de IPC, nos pagan los sueldos tarde y no se cubren los cientos de cargos y horas que han quedado vacantes, dejando a miles de estudiantes sin sus docentes, pero sobre todo a estos cientos de trabajadores sin sueldo para enfrentar el aislamiento obligatorio.

La CTA mantiene el discurso del gobierno de “Quedate en casa” y deja a los trabajadores librados a su suerte. No son capaces de organizar una actividad de protesta, pero son serviles al gobierno poniendo los camiones del

sindicato para recorrer los barrios diciendo que no salgamos. La burocracia que hoy dirige ATEN no ha movido un dedo por los cientos de compañeros desocupados, por las horas y cargos sin cubrir, por las condiciones de trabajo en cuarentena, por la falta de prestaciones en ISSN y sólo sale un puñado de rentados a sacarse fotos en casa de gobierno haciendo como que luchan.

Es sumamente necesario organizarnos y salir a las calles. El abandono que hace ATE de los trabajadores de la salud es aún más evidente por el rol que están jugando, es urgente la respuesta a todos sus reclamos, están arriesgando su vida. La única vía posible de defensa de nuestras conquistas laborales es en la calle organizados junto al resto de los trabajadores, llamamos a todos los trabajadores a fortalecer la coordinación en el marco de la multisectorial de Neuquén y desde allí unificar los reclamos para pasar por encima a la burocracia de ATE y la CTA.

- Pago inmediato de todos los salarios adeudados
- Aguinaldo completo en tiempo y forma
- Realización de asambleas para la cobertura de cargos y horas

No al remate de Cerámica Neuquén Vamos por la estatización de toda la industria Ceramista bajo control obrero

Hace dos semanas llegó una orden de la justicia neuquina a Cerámica Neuquén que da curso al remate de la fábrica. En la misma se dispone que un martillero ingrese, incluso con la fuerza pública, para iniciar el proceso de tasación de las maquinarias de la fábrica. Esta no es la primera vez que la justicia burguesa intenta avanzar con el desalojo. Hace un año el mismo Juez Cosentino intentó hacer lo mismo, sin embargo el arco de solidaridad construido por las diferentes organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos-nucleadas en la Multisectorial por el NO AL REMATE impidió que se pudiese concretar.

Ante esta situación, es importante traer a la memoria la experiencia de Zanon, donde los obreros decidieron defender los puestos de trabajo, tomando la planta y poniéndola a producir ante el lock out patronal. Al igual que hoy, los obreros ceramistas contaron con el respaldo de las organizaciones que, en aquel entonces, nos encontrábamos nucleadas en la Coordinadora del Alto Valle. Nos parece importante destacar esta experiencia recorrida por la clase obrera neuquina porque nos permite poder hacer balance del camino recorrido en estos 19 años -Zanon en el 2001, Stefani en 2008 y Cerámica Neuquén en 2014- y discutir cuál es la perspectiva.

Consideramos que la situación del remate de Cerámica Neuquén, debe enmarcarse en la situación crítica que atraviesa la industria ceramista. Si bien en FASINPAT hace 10 años fue expropiada la fábrica, ello no ha solu-



cionado el problema de raíz porque no fue estatizada sino convertida en cooperativa. Los obreros deben enfrentar el ahogo financiero del estado, la competencia desigual en el mercado capitalista, materias primas a precios dólar, imposibilidad de renovación tecnológica, boletas de gas y luz exorbitantes. Si bien hay una unidad entre los movimientos de desocupados y las cerámicas entendemos que hay que profundizarla para que la producción ceramista esté ligada a la necesidad de vivienda, cada barrio tiene que decir cuántos ladrillos, cuántos cerámicos necesita para construir sus viviendas y así que la idea de la obra pública no sea abstracta sino bien concreta.

Por ello es fundamental dar una respuesta al conjunto de las cerámicas, planteando como programa de lucha la expropiación y estatización bajo control obrero toda la industria ceramista, y hacer una fuerte campaña con esta consigna.

¡No queremos más muertes por la desidia del Estado! ¡Exigimos Viviendas con gas para toda la población!

En un mes, la región ha sufrido la pérdida de cuatro vidas producto de las condiciones precarias de las viviendas que habitaban dos niños y su padre en el Barrio Obrero de Cipolletti y un niño de 12 años de Valentina Rural de Neuquén capital. Decimos con total claridad que los gobiernos son responsables, ya que no han dado respuesta al problema de vivienda y gas que padecen miles de familias.

Es una vergüenza que en una provincia como Neuquén, productora de gas, existan alrededor de 23 mil familias que no cuenten con un servicio esencial como es el gas natural. El gobierno nos llama a “respetar la cuarentena, el aislamiento social”, pero cómo hacerlo cuando las condiciones habitacionales, el hacinamiento, la falta de gas,

agua, luz, forman parte de la realidad de los sectores más postergados, ¿de qué condiciones sanitarias nos vienen hablar si no están garantizadas?

La acción del Gobierno de favorecer el negocio inmobiliario trae consecuencias terribles para los sectores más oprimidos de la población, que deben afrontar las bajas temperaturas sin el suministro de gas, suplantando la calefacción con garrafas, leña o electricidad, lo que implica grandes riesgos.

Tenemos los recursos, la mano de obra, falta la decisión política. Debemos organizarnos en los barrios para exigir que el gobierno ponga en marcha la obra pública, que construya las más de 70 mil viviendas que hacen falta, que provea de gas a toda la población.

Sobre la votación del FIT-U: una clarificación política de los acusadores

La jornada virtual del 18 de junio en la Legislatura Porteña parecía ser igual a tantas otras. Entre un cúmulo de leyes y pronunciamientos intrascendentes que pretenden dar la idea de un trabajo sin descanso para los representantes parlamentarios, apareció una ley que buscaba criminalizar cualquier tipo de crítica que pudiese esbozarse al Estado de Israel. Por ahora, lamentablemente, nada nuevo en el horizonte.

Con la pretendida figura de la lucha contra el “anti-semi-tismo”, la organización sionista IHRA (Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto) logró incluir una pieza estratégica de la política fascizante israelí contra el pueblo palestino, como Proyecto de Ley. Ya el Canciller Felipe Solá había emitido la Resolución 114/2020 comprometida por Alberto Fernández al carnicero Benjamín Netanyahu en persona en su visita a Israel (la primera que realizó al asumir como Presidente), con lo cual restaba que cada una de las Legislaturas provinciales y municipales la adoptasen como propias. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos (incluyendo todos aquellos que se visten de progresistas) sellaron su abrazo a la causa pro-imperialista sin ningún tipo de grieta.

Dejaremos de lado el merecido análisis de esta Resolución que se da en el marco del reforzamiento del ataque y colonización por parte del sionismo israelí y la avanzada sobre la Franja de Gaza y Cisjordania... Algo más aconteció en ese antro de bandidos llamado Legislatura Porteña. Los 3 legisladores del “Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad” (FIT-U) Alejandrina Barry del PTS, Myriam Bregman también del PTS y Gabriel Solano del Partido Obrero votaron a favor de tamaña atrocidad. Luego de una verdadera avalancha de críticas desde los sectores más diversos, la rectificación impostergable de los legisladores del FIT-U partió 9 días después.

Contextualizar lo sucedido

El Partido Obrero Revolucionario ha hecho una formidable sistematización sobre la labor parlamentaria y las elecciones, como ninguna otra organización podría llegar a adjudicarse ni remotamente. Solitariamente hemos expuesto en infinidad de artículos, documentos, charlas públicas, resoluciones de Congresos y Conferencias y folletos cómo debe intervenir un Partido que se reivindique revolucionario y sus representantes (invitamos a estudiar estos materiales concienzudamente). Claro está que esa intervención está condicionada por la política que esa organización levante: no son dos asuntos inconexos. Para ellos hemos llevado adelante una fraternal pero severa crítica al FIT desde su surgimiento en 2011, mostrando cuál sería el derrotero de este Frente. Por eso no lo hemos llamado a apoyar y mucho menos votar, porque lo consideramos pertinentemente un obstáculo en el proceso de maduración de la conciencia de clase. No nos hemos equivocado.

Ningún otro Partido puede mostrar esta coherencia política. El POR jamás se ha dejado engañar por los eventuales triunfos o fracasos del frente electoral. Tanto en el cenit del exitismo electoralista – cuando lograba diputados, o incluso conquistaba la mayoría en la Legislatura salteña –, como en las últimas elecciones con su desplome electoral, no nos hemos dejado arrastrar por los acontecimientos y ha primado en nuestro análisis, el desentrañar las raíces materiales y las presiones de clase que actuaban sobre la izquierda democratizante. El POR puede señalar esto sin abandonar ni por un instante la humildad de los revolucionarios.

¿Para qué toda esta introducción? Un diputado revolucionario puede cometer errores, esta es una verdad elemental que cualquiera debería conocer. Quienes hayan prestado atención y estudiado atentamente nuestra publicación de “La experiencia bolchevique en los Parlamentos” sabrán que el Partido Revolucionario más importante que haya existido estuvo plagado de errores, algunos de una trascendencia mayor. Lenin fue un verdadero arquitecto de cómo debía desarrollarse el aprendizaje en esa institución burguesa, y marcaba al mismo tiempo cómo debía llevarse adelante la atención del Partido en su conjunto a sus representantes parlamentarios. Una enseñanza mayúscula desestimada por los que se proclaman sus continuadores.

Mucho más que una votación fallida

El FIT-U se encuentra profundamente empantanado en un electoralismo democratizante sin retorno y eso no representa ninguna novedad. Mientras más intenta salir, más se hunde, pues no puede ir contra la razón histórica que le dio su nacimiento. Contrariamente a lo que enseñan los clásicos, los representantes centristas no han ido al Parlamento a desenmascarlo y denunciar su contenido de clase. Han ido a realizar una “labor positiva”, a demostrar que ellos pueden sacarle mucho más jugo que cualquier otro diputado. Por eso inflan el pecho cuando reciben el reconocimiento de sus pares de otras fuerzas; por eso se enorgullecen de ser los máximos presentadores de proyectos de ley o tener las intervenciones más largas. Hemos visto ríos de tinta en sus prensas alardeando con estos hitos del “¿parlamentarismo revolucionario?”. Y durante mucho tiempo esta receta funcionó para poblar los parlamentos de gran cantidad de provincias y a nivel nacional.

No son unos recién llegados a la Legislatura Porteña, cuentan con una larga trayectoria en esos recintos y más de 300 proyectos presentados (entre los 3). Solo una cabeza afiebradamente electorera puede caberle el descuido de dejar pasar una ley así sin siquiera ojearla y acompañarla con su voto... avalaremos igualmente la versión sobre un supuesto “descuido”, como ellos mismos arguyeron 9 días después de la sesión. Incluso señalaremos que ni por un instante podríamos sostener que los integrantes del FIT-U

son “pro-sionistas”, como algunos reformistas ventajeros aventuraron achacarle. Tildarlos de “pro-sionista”, si no fuese más que una maniobra oportunista o provocación, deberían llevarlos a sacar las conclusiones que tamaña afirmación conlleva. No lo harán.

Los revolucionarios no entramos en esos parlamentos para dejarnos distraer, para estar al corriente de cada tontería presentada por los representantes burgueses para discutir (aunque este proyecto no haya sido un ejemplo de “tontería”). Entramos para destruir todo tipo de ilusión que se tenga en la posibilidad de resolver alguno de los grandes problemas de la población en estas cuatro paredes. Utilizamos esa tribuna no para alimentar el juego burgués, sino para señalar la movilización y la acción directa como única garantía de las masas de conquistar sus reivindicaciones. El resto es accesorio.

Endilgarle algún grado de responsabilidad a los 3 diputados en la aprobación del proyecto es una concepción igualmente democratizante de sus críticos, y no hace más que revelar el contenido político del señalamiento. Era su deber votar en contra indudablemente, pero no hubiese cambiado en nada el rumbo de lo acontecido. La ley hubiese salido. También es cierto que era su deber pronunciarse señalando las implicancias de esta resolución (como sí realizó la legisladora de “Autodeterminación y Libertad”), pero eso sigue sin permitirnos movernos un milímetro de lo que terminó sucediendo. Entonces ¿por qué originó tanto revuelo este Proyecto de Ley? Prácticamente la totalidad de las organizaciones que se reivindican de izquierda olieron la sangre y corrieron a reclamar su tajada, especulando con réditos electorales futuros.

La fisonomía de los acusadores

Muchas veces la crítica nos permite conocer más al que la lanza que a quien esté dirigida. Solo basta hacer un pequeño recorrido por las más diversas publicaciones de estos partidos para ver el tenor de las recriminaciones, por momentos con una saña y virulencia desproporcionadas. Nuevamente es preciso volver a remarcar lo que pareciera una obviedad... una caracterización no es un conjunto de palabras disociadas de las acciones concretas que de allí se desprenden. Una caracterización, en este caso del FIT-U, tiene que ir acompañada con una coherencia política capaz de darle entidad a estas palabras, un curso de acción que no muestre una flagrante contradicción entre lo que se dice hoy y lo que se hizo hasta ayer.

El NuevoMAS realiza una correcta caracterización sobre el parlamentarismo y el deber de un revolucionario allí adentro. Sin embargo su actividad concreta borra con el codo lo escrito con la mano. Está demasiado fresca en la memoria su campaña electoral para que puedan engrupir o enseñarle a alguien cómo es que interviene un Partido revolucionario en las elecciones y en el Parlamento: su electoralismo democratizante ha estado varios codos por encima del FIT-U. Durante el 2019 ha quedado en evidencia que su intervención electoral buscó estructurarse no alrededor de un cuestionamiento de las instituciones burguesas, sino de una mera candidatura (Manuela Castañeira), es decir una

expresión cotidiana de la política burguesa, guardando en el cajón de los recuerdos todo lo que hoy sacan a relucir de sus lecciones teóricas de marxismo. El NuevoMAS se ha caracterizado por pedir insistentemente el ingreso al FIT casi desde sus orígenes. Para ello ha llegado incluso al colmo de estructurar un frente con el MST para que sirviese como espacio para “discutir candidaturas comunes” con el FIT, es decir un Frente para hacer frente. Cuando el MST logró ingresar al FIT, rápidamente salió a acusar a su hasta la víspera aliado de ser “el partido más oportunista”. Este es el Partido que hoy llama a medir “con la más profunda desconfianza” todas las acciones del FIT-U.

El fruto no cae lejos del árbol reza un dicho popular. La organización cultural “Razón y Revolución” (RyR), parte de cuyos fundadores provenían del Partido Obrero no ahorran epítetos para lo que califican como apestoso “error” del FIT-U. Por un lado los legisladores serían unos “Ineptos o conjunto de ñoquis”, “ejerciendo una función que no cumplen” y por la que “reciben un dinero que sale del bolsillo de quienes deberían defender (!!)” (una de las críticas más despolitizadas de las que se tenga memoria). El FIT-U, por su lado, una “farsa y una estafa”, “un aparato cuya descomposición llega a lugares inimaginables tiempo atrás”, o incluso “la mayor estafa a la clase obrera en nombre de la izquierda”. La conclusión es que para RyR debería “pedirse la cabeza de semejante bestia”. La ruindad de la crítica y el lenguaje soez no es propia de un debate fraternal.

El Partido Obrero (Tendencia) tampoco cae muy lejos del árbol. Resulta curioso que el grupo liderado por Altamira hable de “adaptación parlamentaria” o de “exigir un pronunciamiento público” para repudiar el voto de estos parlamentarios. El propio Altamira – y su Tendencia que dicen poseer una autoridad de “casi 3 años” – padece de una pasmosa amnesia o un déficit severo de autocrítica. Como Legislador se encargó de mostrar que predicar es una cosa y actuar otra muy distinta: entre 2001 y 2002 llegó a presentar 3 proyectos de Ley para “Convocar a una Asamblea Constituyente” que reemplace al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un “verdadero educador socialista”. Pero el paso del tiempo no lo curó de su cretinismo parlamentario como bien quedó demostrado con la adhesión al FIT-U o su lavada campaña electoral en Salta donde se promovían como la “nueva” fuerza de izquierda, explotando lo más atrasado de los prejuicios de la población contra los dirigentes históricos del Partido Obrero (Oficial).

Lenin solía burlarse de quienes exigían cabezas o pronunciamientos públicos y los denominaba “liquidadores al revés” (otzovistas). Estos ultimátum no eran una herramienta pedagógica necesaria para la clase obrera sino una autoproclamación estéril, propios de unos oportunistas incurables. El Partido Obrero (Tendencia) rápidamente mostró sus cartas y anunció recientemente que saldrá a buscar la legalidad en el país para futuras elecciones, sin siquiera haber comenzado a esbozar un balance de los motivos que llevaron a la ruptura. La celeridad que demuestran para abocarse a obtener la legalidad burguesa se opone por el vértice a la necesidad de extraer las lecciones necesarias para no repetir la denunciada degeneración del Partido Obrero (Oficial). Es decir, estos frutos no solo no han caído

do lejos del árbol, parecen ser una copia burda del mismo.

La crítica como herramienta política

Tenemos frente a nuestros ojos a una serie de organizaciones que sin haber realizado ni una pizca de autocritica lanzan punzantes acusaciones contra el FIT-U y su accionar parlamentario. Solo quien tiene que ocultar sus antiguas (y muchas veces presentes) miserias se exageran tanto en sus recriminaciones. Sus prédicas sobre el “parlamentarismo socialista” (que ni se han molestado en estudiar) no ha venido acompañada sobre qué ha cambiado sobre la caracterización del FIT, o si más bien los que cambiaron han sido ellos. De esta forma no solo no permiten que el conjunto del movimiento obrero se eduque, sino que vician la comprensión de su propia militancia, realizando un enorme daño a la discusión en términos políticos.

Trotsky decía que quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir. Toda esta serie de partidos autoproclamados revolucionarios han sido desnudados por el paso del tiempo y enfrentan una situación sin las herramientas teóricas que le permitirían sacar conclusiones. Se arrodillan ante el hecho consumado, cuando el problema ya ha estallado en sus propias narices. Por la ausencia del método marxista han sido incapaces de asimilar un elemento fundacional de una organización que pretenda

intervenir en política: la capacidad de pronóstico.

En el otro extremo se encuentra nuestro Partido Obrero Revolucionario. A pesar del carácter embrionario oportunamente hemos señalado una crítica marxista a las posiciones democratizantes. No nos ha impulsado una cuestión de recelos, ni rencillas personales, sino la necesidad de desentrañar el desenvolvimiento de leyes objetivas que nos permitiesen sacar conclusiones políticas. Desde su formación hemos denunciado que el FIT no constituía una expresión de los intereses en pos de la unidad y de la lucha de la clase obrera (en cuyo caso como revolucionarios nos hubiésemos visto en la obligación de apoyar), sino un acuerdo oportunista en torno a un programa electoralista.

Que no se confunda la cuestión. Reconocemos a valiosos y abnegados luchadores en todas y cada una de las organizaciones por las que hemos pasado revista, ya sea que integren o adhieran o hayan apoyado al FIT. Vemos su imprescindible militancia en lugares de trabajo y estudio, presentes en cada una de los conflictos que ocurren a lo largo y ancho del país. Para organizarnos en pos de los intereses históricos de la clase obrera es imprescindible que toda esta militancia sea ganada a la política revolucionaria del proletariado, es decir a la política porista. Solo así haremos efectiva la lucha por la revolución proletaria, por el comunismo, por acabar con la irracional división de la sociedad en explotados y explotadores.

Internacional

Artículos del CERC

Brasil: Los explotados son los que pagan por la crisis sanitaria y económica

→ **Organizar a la clase obrera como fuerza motriz de la lucha contra el desempleo, el sub-empleo, la pobreza, la miseria y el hambre**

→ **Defender sistemáticamente la estrategia de revolución y dictadura proletaria**

Los efectos de la crisis sanitaria y económica han sido violentos. El desempleo, el subempleo y la informalidad han alcanzado picos históricos. La pobreza y la miseria arrastran contingentes enormes de la población. La brecha entre la ultraminoría rica y las masas empobrecidas se ha ampliado. Los desequilibrios regionales salieron a la luz, exponiendo las contradicciones típicas de un país, que ha estado inmerso, durante más de tres siglos, en la esclavitud colonial, y que mantiene regiones donde las relaciones de producción pre-capitalistas todavía son acentuadas. La pandemia aceleró la débil situación en el país y de los explotados, golpeados, desde 2008, por la crisis económica mundial.

La recesión de 2015 y 2016, que llevó al golpe de Estado, no fue seguida de un crecimiento económico en los años siguientes. El pobre desempeño de la economía no permitió recuperar los millones de empleos destruidos. Las contrarreformas, incluida la laboral, en 2017, y la de seguridad social, en 2019, echaron por tierra las justificaciones de la burguesía y los gobiernos, de que habría un aumento en las inversiones y, por lo tanto, más ofertas de trabajo. Por el contrario, los trabajos se han vuelto más precarios y la informalidad ha dado un salto.

La recuperación económica se tropezó con la continuación de la crisis mundial, agravando la condición del país que exporta materias primas (commodities), con la caída

de los precios internacionales. Este hecho fue potenciado por los problemas similares experimentados por los países vecinos en América Latina. Los indicadores también mostraron el descenso económico, un aumento en el endeudamiento y un aumento en la informalidad en todo el continente. En el período que permitió que el PIB aumentara en casi todos los países latinoamericanos, también hubo una expansión del llamado sector terciario. Gran parte de los empleos creados se concentraron en el comercio, los servicios y los trabajadores por cuenta propia. Los empleos formales creados en la industria fueron extremadamente bajos, 0.8% y, en agricultura, la tendencia continuó cayendo, -1%. Como puede verse, la pandemia se ha intensificado en el continente, ya debilitado económica y socialmente.

Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirman que la contracción económica podría ser de alrededor del 5,3% del PIB regional. Lo que significa que las tasas de desempleo podría alcanzar el 11.5%, a fines de 2020, dependiendo del mayor o menor aislamiento social y el retorno de las actividades económicas. En relación con la tasa de pobreza, señala que puede aumentar un 4,4% y la pobreza extrema, un 2,6%, en relación con 2019. Esto representa 214,7 millones de la población latinoamericana, que estaría en la pobreza, y 83, 4 millones, en extrema pobreza.

En el caso de Brasil, en los tres meses de la pandemia (marzo, abril y mayo), los datos de la Encuesta Nacional de Muestra Continua de Hogares (Pnad Contínua), del IBGE, muestran que 7.8 millones de trabajadores perdieron sus empleos. Señalan que, por primera vez, desde que comenzaron la investigación en 2012. más de la mitad de

la población en edad de trabajar está desempleada. Esto significa que 87,7 millones están desempleados, teniendo en cuenta los llamados “desanimados”, incluidos los estudiantes, todos los cuales pueden trabajar. Así, la población ocupada cayó a 85,9 millones. La situación es aún peor cuando se enfrenta con la destrucción de 2.5 millones de empleos formales. También el trabajo informal ha sido afectado. Hay 5.8 millones de trabajadores informales que perdieron sus empleos durante estos meses de la pandemia. Es un contingente que depende directamente del retorno de las actividades económicas. A pesar de la reanudación del comercio y los servicios, y el regreso de los vendedores ambulantes, la “normalidad” para esta masa de trabajadores, que tiende a crecer, no está asegurada, ya que los despidos continúan aumentando.

Los gobiernos latinoamericanos siguieron, en gran medida, las mismas pautas frente a la crisis sanitaria: proteger a los capitalistas, y licenciar una parte de la población, los llamados “vulnerables”, un auxilio de emergencia a cuentagotas. Siguiendo las directrices de la OMS y la OIT, organismos dirigidos por la burguesía imperialista, los países deberían implementar tres acciones: 1) “protección de los trabajadores en el lugar de trabajo”, que presupone la creación de turnos y horarios escalonados, trabajo a distancia, remoción de trabajadores afectados por la enfermedad; 2) “política de apoyo a los empleos y salario”, que se refiere a la reducción de las jornadas y salarios, y asistencia de emergencia a los trabajadores informales; 3) “política de promoción de la actividad económica”, que implica subsidios y prorrogación de los pagos de impuestos por parte de los empresarios.

El problema es que los países latinoamericanos no tienen los recursos fiscales, la deuda pública es gigantesca, los intereses elevados y, con el aislamiento social, cayó la recaudación. Por otro lado, solo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay contaban, en 2019, con seguro de desempleo, para ser utilizado por trabajadores con un contrato formal, en caso de despidos o reducciones salariales (como Brasil). Y el sistema de salud pública, a su vez, es extremadamente precario, lo que ha impedido y evita el acceso de la población pobre, en caso de contagio. No es casualidad que el número de muertes en todo el continente esté creciendo de manera alarmante, como ejemplo de Brasil, con casi 70 mil muertes.

En Brasil, el gobierno impuso la Medida Provisional 936 (MP), que autoriza a los capitalistas a suspender los contratos y reducir los salarios. Parte del salario es pagado por el patrón y parte se retira del seguro de desempleo. Decretó la ayuda de emergencia de R \$ 600,00, en tres cuotas, y prorrogable por dos veces más, a los informales. Un contingente significativo de asalariados se colocó en bajo la forma de trabajo remoto (teletrabajo). Los docentes (públicos y privados) quedaron sujetos a la educación a distancia (DE). Los empresarios, en particular las multinacionales, buscaron seguir las pautas para la rotación de trabajadores, la distancia en el lugar de trabajo, la medición de temperatura y el uso de máscaras y alcohol. Y en poco tiempo, exigieron el fin del aislamiento social y



PÔR EM PÉ UM MOVIMENTO POR EMPREGO, SALÁRIO E PROTEÇÃO SANITÁRIA!

Que as centrais e sindicatos convoquem as assembleias

UNIR EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS

Constituir os comitês de base. Derrubar as reformas trabalhista e previdenciária. Combater a MP 936 antioperária. Rechaçar a política de conciliação de classes.

TODA FORÇA À AÇÃO DIRETA DAS MASSAS.

Desenvolver a estratégia da revolução e ditadura proletárias

Bolívia

Operários saem às ruas contra o fechamento de fábricas e demissões

O POR boliviano defende a generalização da luta dos trabalhadores fabris

la reanudación de las actividades. En este momento, con la disminución de la cuarentena, hay casi “normalidad” en las capitales y las grandes ciudades, aunque el número de personas contagiadas y muertas no deja de crecer. Permanece aislada la parte relacionada con la educación, con fecha para regresar a la escuela. El sistema educativo privado presiona a los gobiernos para que pongan fin a la cuarentena.

En algunos países latinoamericanos, antes de la pandemia, las normas para el teletrabajo ya se estaban creando de manera permanente. Por ejemplo Chile, que aprobó la Ley 21220, que modificó el Código del Trabajo, permitiendo este tipo de prestación de servicios. En Brasil, se aprobó la reforma laboral, que legaliza el trabajo a distancia. En países donde todavía no ha habido una ley específica, los gobiernos han emitido normas para el trabajo a distancia, de manera excepcional. Es el caso de Paraguay, que durante la pandemia creó esta modalidad para empresas públicas y privadas (Ley 6524). Y Ecuador, que instituyó el “teletrabajo emergente”. Ciertamente, pospandemia, el trabajo remoto y la educación a distancia van a consolidarse y podrían ser ampliados.

El informe de la CEPAL y de la PNAD Continua del IBGE demuestra que el capitalismo se descompone y que la mayoría oprimida sufre las brutales consecuencias. Los gobiernos aplican medidas que descargan todo el peso de la crisis sobre la clase obrera y demás explotados, protegiendo el gran capital nacional e internacional. Los portavoces de los organismos internacionales piden tener cuidado con la situación social, que empuja a millones al flagelo del hambre. Son otra advertencia para la burguesía y sus gobiernos sobre el peligro de los levantamientos obreros, campesinos y populares, ya preanunciados en varios países de América Latina. No se sabe hasta cuándo, y en qué medida, la burocracia sindical y los partidos que se visten de reformistas podrán contener el dique que detiene las tendencias más profundas de la revuelta de las masas. El ejemplo de Chile todavía asusta a los gobernantes.

La pandemia, aunque no haya provocado la crisis económica, aumentó las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La destrucción masiva de la fuerza de trabajo, y la persistencia de la recesión económica, pone, a los ojos de la clase obrera, la incapacidad de la burguesía para encontrar una manera de resolver la barbarie, que avanza libremente. Al mismo tiempo, exige que se lance a la lucha, y superen sus direcciones conciliadoras y traidoras. La crisis política favorece la lucha independiente de la clase obrera, ya que expresa las divisiones inter burguesas y la desintegración de sus gobiernos.

Estas condiciones, en las que se combinan varias crisis interconectadas, sientan las bases para que la clase obrera tome la delantera en los movimientos de masas. Este es el punto fundamental del momento. El proletariado es la única clase capaz de plantear su propio programa y estrategia de poder. La pequeña burguesía, cada vez más arruinada, no puede expresar la política de independencia de clase.

Una de sus capas más avanzadas tiende a converger con el proletariado. El futuro de sus reclamos depende de esta convergencia. Otra capa, afectada por la desesperación, tiende a encontrar una solución en la política ultraderechista y fascista de un sector de la burguesía. Las fuerzas reaccionaras serán contenidas y derrotadas, si la clase obrera se emancipa de la política de conciliación de clases y se coloca como dirección de la mayoría oprimida. Esto está sucediendo no solo en Brasil, que tiene un gobierno militarista frente a él, y que cuenta con el apoyo de la capa pequeño burguesa fascista, sino en toda América Latina, con mayor o menor claridad. Es una ilusión pequeñoburguesa la posición de que la tarea es salvar la democracia y ponerla al servicio de los explotados. Resulta que esta suposición ignora el estado avanzado de desintegración de las fuerzas productivas, el aumento del parasitismo financiero y la incapacidad de la burguesía para sostener su propia democracia. Y no reconoce a la clase obrera como la única clase capaz de levantar el programa y la estrategia revolucionaria. Está allí por qué no admite que el problema fundamental de la situación radica en el bloqueo de la clase obrera, cuyos organismos están controlados por las direcciones conciliatorias y traidoras.

El ambiente de la crisis profunda fomenta la presentación y demostración de datos aterradores, como los publicados por CEPAL e IBGE. Están gestionados, no solo por los políticos de la burguesía, sino también por aquellos reformistas y centristas, que se reivindican del socialismo. La conclusión de los burgueses es que los gobernantes deben unirse en torno a un plan económico pos-pandemia; y los pequeños burgueses de izquierda piensan que se trata de intercambiar un gobierno burgués fascizante por un gobierno burgués más democrático. Hay quienes dicen lo que piensan con todas las letras, otros lo ocultan bajo la máscara del revolucionarismo. Un hecho que llamó la atención fue el ataque de los bolsonaristas a la bandera de la dictadura del proletariado, levantada por el POR, su condena por parte de los liberales y, sorprendentemente, su reprobación por parte de la izquierda, quienes sostienen que es el momento es unir fuerzas en torno al impeachment y del “Fuera Bolsonaro”.

No hay duda de que la clase obrera se levantará contra la burguesía y su gobierno en función de sus demandas más sentidas, como la defensa del empleo, los salarios y la salud. La burocracia sindical y sus seguidores de izquierda trabajan en la dirección opuesta. Acaban de someter a los explotados a la MP 936 y a la miserable ayuda de emergencia de R \$ 600.00. Están en silencio ante los despidos masivos. No hacen nada contra el cierre de fábricas. No mueven un dedo contra el sistema de salud privado, que ha demostrado ser el mayor obstáculo para la defensa de los pobres y miserables, afectados por la pandemia. La tragedia que sacudió a la mayoría oprimida refuerza la necesidad de propagandear, agitar y organizar la lucha en función de las necesidades más elementales de los explotados, vinculándolos a la estrategia de la revolución y dictadura proletaria.

(1 de Julio de 2020 – POR - Brasil)

¡Vivan los piquetes en huelga de hambre de las Federaciones de los Magisterios Urbanos de La Paz, Cochabamba, Sucre y Oruro! ¡Viva URMA!

Las cuatro Federaciones urmistas de maestros urbanos de La Paz, Oruro, Sucre y Cochabamba, asumen la medida de huelga de hambre instruida por la Confederación del sector pero bajo NUESTRAS PROPIAS BANDERAS DE LUCHA..

Independencia Sindical para alcanzar un pliego común que exige:

1) Más presupuesto para salud porque faltan Ítems, bioseguridad, reactivos y laboratorios para enfrentar la pandemia.

2) Abrogación del privatizador D.S. 4260, y defensa de la educación fiscal y gratuita.

3) Fuera el incapaz Ministro de Edu-

cación, Víctor Hugo Cárdenas.

4) Internet gratuito para todos los estudiantes, estatización de las empresas Tigo y Viva.

5) Defensa del Escalafón, ¡basta a la designación de ítems en el magisterio a profesionales libres!

6) Convocatoria inmediata al examen de ascenso de categoría.

7) Contra los despidos y rebajas de salarios a los trabajadores.

8) Exigir a las autoridades nacionales, departamentales, municipales y a la administración de la caja que destinen los recursos necesarios para la atención de los trabajadores y poder

enfrentar efectivamente la pandemia. Que el Estado intervenga todas las clínicas privadas para asegurar el derecho a la salud de todo el pueblo boliviano.

Nuestra lucha se realiza en el marco de la independencia política de nuestras organizaciones sindicales. Rechazamos cualquier intento de comprometer nuestro movimiento con los afanes electoralistas de los masistas, jañistas, mesistas, y otros.

¡ VIVA LA HUELGA DE HAMBRE POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN, SALUD Y EL TRABAJO! ”

(Masas Extra – 06/07/2020 POR – Bolivia)

Pandemia y lucha de clases

El fenómeno social es concreto, complejo y contradictorio y es preciso comprender las implicancias de sus componentes para poder prever las perspectivas de su desarrollo.

En el presente caso, es necesario precisar que el factor fundamental que determina la lucha de clases es la crisis estructural del capitalismo que es resultado de choque de la contradicción en la base económica del sistema social capitalista moribundo. Se trata del choque entre el gran desarrollo de las fuerzas productivas (máquinas, fuerza de trabajo, etc., que se traduce en la enorme capacidad para producir) con las relaciones de producción (gran propiedad privada de los medios de producción que se ha convertido en freno de la producción).

Esta crisis, en el capitalismo, se resuelve con la destrucción de una parte de las fuerzas productivas cerrando centros de producción, condenando a los trabajadores a la desocupación, reduciendo salarios y beneficios sociales, etc., o por medio de las guerras que significan destrucción masiva de las fuerzas productivas. Mientras sobrevive el capitalismo, estas crisis se presentan de manera cíclica, cada cierto tiempo, cada vez seguidas y profundizándose cada vez más. Ahora estamos viviendo una de ellas, que obedece a las leyes internas del desarrollo del capitalismo y no a la voluntad de los gobernantes.

El fenómeno de la pandemia ha acelerado y profundizado la crisis económica. Con las cuarentenas y los encapsulamientos ha agravado la paralización de la producción y con ello un desbarajuste en la economía. Consecuentemente, agudiza la miseria y todas las demás calamidades sociales. La gente es doblemente castigada por sus efectos y por la

miseria, creando además una sensación de gran inseguridad en las grandes capas de la población más desprotegida

En la conciencia de la gente está lidiando la contradicción del tormento del hambre y del terror a morir por los efectos de la pandemia. En este momento, debido a los cuadros dramáticos que a diario se muestran por el crecimiento exponencial de los contagios, el colapso de los centros de salud, la falta de respiradores y de medicamentos, la falta de médicos y del personal de salud, las muertes en los domicilios y en las calles, la incapacidad de los cementerios y de los hornos de cremación para recibir a la gran cantidad de muertos, la improvisación de cementerios clandestinos en terrenos baldíos, etc., el temor a la pandemia opaca momentáneamente el tormento que provoca la crisis económica.

Debemos estar conscientes de que la crisis económica sobrevivirá a la crisis sanitaria por varios años más. En la medida en que la pandemia vaya mitigándose poco a poco, la lucha de clases irá cobrando mayor intensidad porque los combatientes irán cobrando confianza en sus propias fuerzas. Entonces habrá llegado la hora de librar las batallas más importantes contra el Estado burgués, la empresa privada nativa y las transnacionales imperialistas. Dependerá de la capacidad que desarrollen los explotados y oprimidos para dotarse de direcciones que puedan unir sus luchas en torno a un programa que represente los intereses de todos. Sólo en esas condiciones se podrá saltar de las luchas puramente reivindicativas y sectoriales a la lucha de clases franca que es fundamentalmente política porque su objetivo será el destino del Estado y del poder político.

Algunos sectores del proletariado, los más directamente

golpeados por la crisis económica como los fabriles, empiezan a incorporarse a las movilizaciones, pero el terror colectivo impide que avancen más aceleradamente. En Cochabamba, por ejemplo, los trabajadores que han sido afectados por los despidos han decidido postergar su proyectada marcha hacia La Paz hasta después de la cuarentena rígida que concluye el 13 de julio; la huelga de hambre de los maestros encuentra dificultades para incorporar a sus bases a las movilizaciones callejeras y por su aislamiento, probablemente,

estén obligados a suspender la medida sin haber logrado sus objetivos. Se trata de las primeras escaramuzas que van a desembocar en la gran batalla, en el período de la mitigación de la pandemia y después, porque los explotados y oprimidos se encontrarán ante la disyuntiva de o morir de hambre o defender sus fuentes de trabajo, sus salarios, sus beneficios sociales y su derecho a vivir.

(Masas Extra – 06/07/2020 POR – Bolivia)

A 85 años de la fundación del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.)

En el mes de junio de 1935 en Córdoba (Argentina), se fundó el PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (P.O.R.), como sección de la Oposición de Izquierda internacional, más tarde aparecería como la “liga comunista internacional” y que en 1938 sería la Cuarta Internacional (IV.I.)

Su fundador fue el marxista boliviano José Aguirre Gainsborg, él estaba seguro de poner en pie a la vanguardia revolucionaria, respuesta que fue a la convulsión social y posterior guerra del Chaco. El marofismo (grupo Tupac Amaru), fue incluido al POR, sin la necesaria discusión sobre el problema internacional, que involucraba cuestiones organizativas y de la necesaria y urgente caracterización del país, por tanto, el enunciado de su finalidad estratégica.

Ya por los años cuarenta debuto en la política boliviana, penetrando en el movimiento obrero.

Cabe aquí resaltar en estos años (85), la contribución realizada en sus escritos “Tesis de Pulacayo”, las Obras Completas (OO.CC) 70 Tomos, folletos y sobre todo la “historia del movimiento Obrero”, los documentos políticos elaborados en las Conferencias y Congresos, y su incesante labor el de poner en pie la IV internacional.

Y sobre todo la Asamblea Popular el primer Soviet, que fue constituido el 01 de mayo 1971, hecho que significo conformar el frente antiimperialista revolucionario dirigido por la clase obrera. Y las diferentes organizaciones para consumir la revolución social.

Hoy todos los militantes del P.O.R, rendimos nuestro más cálido homenaje en estos 85 años de su fundación, y seguiremos en la lucha política, económica y social, por un mañana y un futuro mejor.

Y aquellos que nos combaten como los de la vieja derecha o nueva, estalinistas, centristas, etc. les gritamos a voz en cuello que seguiremos por el camino que señala la revolución, y de aquellos bolcheviques que, en octubre de 1917, transformaron hasta instaurar el gobierno Obrero – Campesino. En nuestro país con el Partido Obrero Revolucionario los obreros, campesinos y las masas lograremos instaurar la Dictadura del Proletariado.

¡¡¡VIVA EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (P.O.R.)!!!

¡¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL Y EL GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS!!!
Junio 2020

El país a la deriva

El gobierno de transición se hunde en su incapacidad para resolver ningún problema.

La pandemia en ascenso se desarrolla descontroladamente, los contagios crecen exponencialmente, los centros de salud han colapsado, no hay respiradores (después del escándalo del negociado con los primeros 170 respiradores, nada más se sabe sobre el tema y el yerno de la presidenta, el embajador científico, Mohamed Mostajo, ha desaparecido de los medios de comunicación y huido a Nueva York a seguir con sus funciones “ad honorem”). No hay medicamentos, faltan médicos y personal de salud, los infectados mueren en sus domicilios y en las calles, los cementerios ya no tienen capacidad para enterrar a los muertos ni los hornos de cremación para incinerarlos, se improvisan cementerios clandestinos en terrenos baldíos, etc.

Todo esto en medio de una orgiástica masacre blanca patronal con plena libertad para despedir trabajadores, hacerlos trabajar sin condiciones de bioseguridad, rebajar los salarios o deberles salarios por meses.

En medio de esta dramática situación, las autoridades nacionales, departamentales y locales, han mostrado total incapacidad muy lejos de atender las necesidades más elementales de la crisis sanitaria. Junto a las pandillas de politiqueros ansiosos de llegar al Poder, se encuentran enfrascadas en una guerra sucia

electorera y en una campaña electoral cínica buscando lograr votos de los moribundos.

Todo indica que la burguesía se orienta a electoralizar la situación con la ilusión de contener el creciente malestar social que puede estallar en cualquier momento y que seguro lo hará cuanto la pandemia se vaya atenuando. Buscan hacer consentir a los explotados que soportan la brutalidad de la crisis, que la ausencia de gobierno se resolverá por la vía de elegir a uno legítimo por la vía de las urnas.

Así se explicaría que la presidente Jeanine Añez haya tenido que firmar la convocatoria a elecciones a pesar de no estar de acuerdo, o entender el planteamiento del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en sentido de buscar un acuerdo con Mesa ante el peligro de que el M.A.S salga beneficiado por la atomización de la vieja derecha.

Pero este desgobierno es la expresión de la incapacidad de la burguesía para resolver los grandes y pequeños problemas del país. Cualquiera que venga será igualmente incapaz, corrupto, explotador, hambreador y vende-patria.

Es este orden social capitalista atrasado el que no merece existir, al que hay que sepultarlo de una vez por todas.

(Masas Extra – 06/07/2020 POR – Bolivia)